



### **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

Decisión No. 116

Medellín, seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 806 del 04 de junio de 2020, procede a proferir el fallo dentro de este proceso ordinario promovido por **MARÍA LIGIA TORO COLORADO** contra **LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**.

Se reconoce personería jurídica al doctor Alejandro Miguel Castellanos López con tarjeta profesional No. 115.849 del Consejo Superior de la Judicatura para representar los intereses de la Sociedad Administradora De Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

A continuación, la Sala, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 049 de discusión de proyectos, adoptó el presentado por el ponente que se consigna enseguida:

Señala la demandante que nació el 10 de mayo de 1.961 y durante su vida laboral estuvo afiliada en pensiones en el ISS desde el 22 de agosto de 1979 hasta el 31 de agosto de 1999; que se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S.A. el 1 de octubre de 1999, fondo en el que en la actualidad se encuentra afiliada; que en el año 2015 solicitó a Porvenir S.A. dejar sin

efectos su afiliación a ese fondo, por haberle omitido información de vital importancia; acto seguido solicitó a Colpensiones el traslado al régimen de prima media, solicitud que le fue rechazada.

Con base en los hechos expuestos solicita que se deje sin efectos la afiliación al sistema de ahorro individual con solidaridad realizado en el fondo de pensiones Porvenir S.A., como consecuencia de lo anterior se declare que permanece afiliada sin solución de continuidad en el RPMPD administrada por Colpensiones; que se condene a Colpensiones a reconocerle la pensión de vejez desde que cumplió los requisitos para la prestación, intereses moratorios o en subsidio indexación y costas procesales.

La apoderada de COLPENSIONES se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las excepciones de: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA AFILIACIÓN AL RPM Y DE PAGAR PENSIÓN DE VEJEZ, IMPOSIBILIDAD DE RETORNAR AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA POR FALTA DE REQUISITOS LEGALES, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA Y FALTA DE DERECHO PARA PEDIR, DEVOLUCIÓN DE APORTES DEBIDAMENTE INDEXADOS, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, DESCUENTO DEL RETROACTIVO POR SALUD, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS.

El apoderado de PORVENIR S.A se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las excepciones de: PRESCRIPCIÓN, FALTA DE CAUSA PARA PEDIR E INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES DE TRACTO SUCESIVO, ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA, INNOMINADA O GENÉRICA.

**EI JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN,** DECLARO la ineficacia del traslado de María Ligia Toro Colorado del RPMP al RAIS, por falta de consentimiento, declarando que la demandante permanece afiliada en el RPMPD sin solución de continuidad durante el tiempo en que ha estado vinculada al sistema general de pensiones; Condenó a la AFP Porvenir S.A. a trasladar, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, los aportes efectuados por la demandante, incluyendo frutos y rendimientos financieros causados, asumiendo con cargo a su patrimonio

el concepto de gastos de administración. Condenó a Colpensiones a recibir los aportes que la AFP Porvenir S.A. le devuelva como resultado de la ineficacia, y a tener en cuenta el tiempo cotizado como semanas cotizadas que deberá reflejarse en la historia laboral. Condenó a Colpensiones a pagar a la demandante la pensión de vejez bajo los presupuestos del artículo 9 de la ley 797 de 2003, dejándose en suspenso el pago de la obligación hasta el retiro del sistema; costas a cargo del fondo privado. Se Absolvió a Colpensiones de las demás pretensiones.

### **IMPUGNACIÓN**

Interpuso recurso de apelación la abogada de Porvenir S.A. quien manifestó su desacuerdo indicando que la información suministrada a los afiliados del RAIS se encuentra acorde con las disposiciones legales y la vigilancia y control que ejerce la Superintendencia financiera de Colombia, por lo tanto las reglas y condiciones que se realizaron en las vinculaciones de los afiliados y el reconocimiento de sus prestaciones no son caprichosas, sino que son el resultado de dichas disposiciones que regulan el RAIS, por lo que no se puede decir que hubo falta de información, toda vez que del formulario de afiliación se extrae que hubo una solicitud de afiliación a la AFP Colpatria, hoy Porvenir, siendo indispensable indicar que para la fecha en que se perfeccionó el traslado de la actora los fondos privados no tenían la obligación de brindar información en los términos que le exige la ley 1328 de 2009 y demás leyes concordantes. Manifiesta su inconformidad respecto de la devolución de las cuotas de administración, considerando que no hay lugar a la devolución de este emolumento.

Frente los demás puntos en que la sentencia fue adversa a los intereses de Colpensiones y no se interpuso recurso de apelación, se surte el grado jurisdiccional de Consulta, como lo ordena el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Oportunamente anexó los alegatos el abogado de Porvenir SA, quien manifestó que no le asiste razón al fallador de primera instancia, por cuanto

en este asunto no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento con el cambio de régimen de la parte demandante, pues no se alegó y menos probó ningunas de las causales previstas en el artículo 1741 del Código Civil, lo que conduce a que el acto jurídico de vinculación con mi representada es eficaz.

Esta norma, claramente prevé que cuando existe: a) objeto o causa ilícita; b) omisión de alguno de los requisitos que prescriben las leyes para el valor de estos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan; c) cuando lo celebra una persona absolutamente incapaz, el negocio jurídico o el contrato está viciado de nulidad absoluta. Advierte esta misma disposición que, cualquier otra irregularidad produce una nulidad relativa.

De igual forma, el artículo 1598, expresa cuáles son los vicios del consentimiento, esto es, error, fuerza o dolo y en los artículos subsiguientes, se explican que se puede presentar; a) error en la naturaleza del acto o negocio jurídico; b) sobre la identidad del objeto; c) en la calidad del objeto; d) o error en la persona. Así también, el artículo 1513, explica las nociones de fuerza, el 1515 del dolo, el 1517, del objeto ilícito, y el 1524 de la causa ilícita.

De otra parte, si lo que se pretende es declarar la ineficacia que prevé el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, esta norma en forma clara y sin lugar a interpretaciones distintas, establece que cualquier persona natural o jurídica, hubiera realizado actos atentatorios contra el libre derecho de elección del afiliado, se haría acreedor a una multa ADMINISTRATIVA impuesta por el Ministerio de Trabajo, y si bien, menciona que quedará sin efecto la afiliación, también lo es que, bajo ninguna circunstancia se refiere si quiera por aproximación a lo dispuesto en los artículos 1740 y ss, por un principio básico de derecho, cual es el de la inescindibilidad de las normas, que impide acudir en forma indiscriminada a diferentes normas para resolver un asunto en concreto; pese a lo expuesto, para definir las declaraciones de ineficacia y/o nulidad de los traslados de régimen pensional, se acuda a normas propias del sistema general de pensiones -artículo 271 de la Ley 100 de 1993, sin consideración a que esta disposición, indica en forma expresa

que será ineficaz un traslado cuando se ejecutan las conductas con la intención que allí se mencionan, pero para establecer los efectos de esta ineficacia, se acude a disposiciones del Código Civil, sin tener en cuenta igualmente los presupuestos que este compendio normativo consagra para que se declare la nulidad de un acto o contrato.

En el presente asunto, la parte demandante se trasladó a Porvenir S.A. en el año 1999 de forma libre y voluntaria, en el cual se le brindó una información oportuna y completa, como lo aseveró al suscribir el formulario de afiliación con Porvenir S.A, en consecuencia, no se debe ordenar la devolución de sumas diferentes a las indicadas en citado literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, por cuanto ningún otra valor está destinado a financiar la prestación del afiliado, por lo que condenar a pagar valores adicionales, configura un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico celebrado entre la parte demandante y Porvenir S.A. como lo es COLPENSIONES; pero además, determinar que se deben reintegrar los gastos de administración o las primas de seguros, es tanto como ordenarle a una compañía de seguros a que sino se presenta el siniestro amparado, devuelva el valor de la póliza.

En este orden de ideas, los gastos de administración ni primas de seguros, al no corresponder a valores que pertenecen a los afiliados en ninguno de los regímenes pensionales en cuanto no financian la prestación de vejez y por ende no son parte integrante de ella, razón de peso para descartar su imprescriptibilidad, característica de que si goza el derecho pensional; luego, si están sujetos al fenómeno previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS, y así deberá declararse.

A su turno la abogada de Colpensiones anexo oportunamente os alegatos manifestando que la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modifico el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993, el cual estableció claramente que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para adquirir su pensión de vejez, supuesto jurídico en el cual nos debemos basar en el caso en concreto toda vez que la señora MARIA LIGIA TORO COLORADO, solicito el traslado posterior al cumplimiento de la edad

límitrofe establecida, por un descuido imputable a ella misma. Motivo por el cual ahora se pretende la declaración de ineficacia por la parte demandante al ver que no le queda otra alternativa conforme a los supuestos normativos ya referenciados y por tal decidió optar por demanda bajo la figura jurídica que hoy nos ocupa la cual fue creada con el ánimo de proteger a la personas realmente afectadas y convirtiéndose a hoy en el camino de salida para todos aquellos que tomaron una decisión en su momento y que al considerarla no acertada patrimonialmente pretenden sanearlo, debiéndose aclarar con el mayor respeto que es claro que el único interés recae sobre el beneficio económico que se puede obtener el Régimen de Prima Media al momento de pensionarse, lo que claramente no es un fundamento legal para que se concedan la pretensiones invocadas tal y como lo hizo el juzgador en primera instancia.

Así las cosas, se solicita en primer lugar revocar la sentencia de primera instancia declarando prosperas las excepciones presentadas por la entidad que represento y por tal improcedentes las peticiones de la demanda por no ser procedente la ineficacia invocada y en segundo lugar, de forma subsidiaria se solicita en el caso de prosperar la ineficacia, se ordene la devolución de todos los rubros percibidos por el fondo privado sin importar el concepto a que se refieran en razón a las cotizaciones efectuadas por la parte actora y la indexación de los mismos.

### **CONSIDERACIONES**

La señora María Ligia Toro Colorado nació el 10 de mayo de 1961, como se ve en la copia de la cédula de ciudadanía de folios 41; se afilió al Régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS el 22 de agosto de 1979 hasta el mes de agosto de 1999, como se desprende de la historia laboral inserta a folios 14 a 18; posteriormente se trasladó al régimen de ahorro individual suscribiendo formulario de afiliación a Colpatria el 24 de agosto de 1999, hoy Porvenir (fls.186), fondo en el cual se encuentra afiliada, como se desprende de la historia laboral inserta a folios 190 a 222. El 17 de junio de 2015, solicitó a Porvenir S.A. la nulidad del traslado (fls. 19 y 20), petición que igualmente elevó ante Colpensiones el 26 de junio de 2015 (fls.21 y 22), dando respuesta Colpensiones el 9 de julio de 2015, negándole

el traslado, ya que no contaba con 15 años o más de servicio cotizados al entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones requerido para efectuar el traslado por sentencia unificada 062 de 2010 (fls.24 ); se le indicó que por faltarle menos de 10 años para pensionarse no era posible trasladarla de régimen (fls. 25); también dio respuesta el fondo Porvenir S.A., en comunicado del 13 de julio de 2015, manifestando que el traslado de la demandante fue de manera libre y voluntaria, suscribiendo formulario de afiliación, es decir que el traslado se dio sin ningún tipo de presiones, también se le dice que no está amparada por las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, toda vez que no registra el número mínimo de semanas cotizadas a Colpensiones antes de entrar a regir la ley 100 de 1993. (fls.26 a 27).

Esta Sala pasará a analizar en primer lugar el recurso interpuesto por la apoderada de Porvenir S.A., quien señala que no hay lugar a la declaratoria de la ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, con el consecuente regreso al régimen de Prima media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES.

Como el argumento esbozado por la demandante como fuente de su derecho es el de la indebida información, debemos señalar que a lo largo de los años se ha pronunciado la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia sobre este particular, trayéndose a colación las sentencias del 9 de septiembre de 2008, radicación 31.989, M.P. Dr. Eduardo López Villegas; del 22 de noviembre de 2011, radicación 33.083, del 03 de septiembre de 2014, radicación 46.292, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón y 03 de abril de 2019, radicación No. 68852, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, exponiéndose en esta última lo siguiente:

*“En efecto, la jurisprudencia del trabajo ha entendido que la expresión libre y voluntaria del literal b), artículo 13 de la Ley 100 de 1993, necesariamente presupone conocimiento, lo cual solo es posible alcanzar cuando se saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, la Corte ha dicho que no puede alegarse «que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; **de allí que desde el inicio** haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta*

*de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.”*

Así que **PORVENIR S.A.**, tenía la obligación de brindar una asesoría personalizada y completa, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar entre otras cosas, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta individual, el número de beneficiarios y la edad de los mismos; la posible redención del bono pensional; la densidad y constancia de los aportes; y que si no se completa el suficiente capital para obtener, por lo menos una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo legal vigente, a la fecha de expedición de dicha ley actualizado con el IPC), debe seguir cotizando; la existencia de diferentes modalidades pensionales, como efectuar las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios futuros de ambas opciones y otras tantas observaciones indispensables para la ilustración debida del usuario, reiterándose que la labor del funcionario del fondo privado, al realizar el traslado, debe trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO” como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, mostrándole al afiliado en detalle las ventajas y desventajas del traslado, a fin de que dicha decisión sea realmente pensada, libre y voluntaria.

Y ese deber de información a cargo de las administradoras referidas, no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 de 2015, sino que los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, exigían de estas cumplir sus funciones con suma diligencia, prudencia y pericia, dentro de las cuales se debe entender: *la transparencia, vigilancia, y la información*. Esto, según lo ha dicho la jurisprudencia, a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas, sino también a las *que emanan de la naturaleza de la obligación*, no asistiendo razón al recurrente en este punto.

Y si bien la entidad privada afirmó que a la demandante se le brindó la asesoría requerida, de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, tenía la carga de acreditarlo, lo que no hizo, simplemente aportó el formulario de afiliación, el que nada dice sobre las implicaciones del traslado, siendo



procedente, como lo concluyó la juez de primera instancia, la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual de la demandante.

La anterior declaración conlleva consecuencias en contra de Colpensiones, revisándose este aspecto en el grado jurisdiccional de consulta, pues la ineficacia del traslado da lugar al regreso automático al régimen de prima media con prestación definida, retrotrayendo la situación al estado de cosas iniciales, siendo dable afirmar que la afiliación del actor a Colpensiones, nunca sufrió alteración.

Es por esta razón que al ser Colpensiones la administradora de pensiones quien eventualmente tendrá a su cargo el reconocimiento de la prestación, es viable confirmar la orden impartida, de recibir los dineros de las cuentas de ahorro individual, ya que con dicho capital se pagarán los beneficios que se causaren; traslado que debe incluir todos los valores recibidos por Porvenir S.A., con motivo de la afiliación del demandante, como: Cotizaciones, descuentos de la garantía de pensión mínima, cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses y los rendimientos sin deducción alguna, como lo dispone el Artículo 1746 del Código Civil y la sentencia del 09 de septiembre de 2008, radicación 31.989, como lo determinó la A quo, sin que en este punto le asista razón al abogado del fondo privado, quien pretendía que no se ordenara la devolución de los gastos de administración; adicionándose este punto de la sentencia.

Ahora, en lo que corresponde a los argumentos de expuestos en los alegatos de la apoderada de Colpensiones, quien pretende que los dineros y demás conceptos que le debe devolver Protección y Porvenir, se entreguen indexados, considera esta sala que no es procedente esta solicitud, ya que es un tema que no fue discutido en el litigio, ni refutado por la accionada en la contestación de la demanda, siendo una situación nueva que no coincide con la oposición, ni con lo señalado por el Juez de primera instancia, estando en contravía con el principio de congruencia, previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso, que establece que la sentencia debe estar *"...en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda... y con las excepciones que*

*aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley...". y no obstante existir la posibilidad de pronunciamientos ultra y extra petita, dada la protección especial que legal y constitucionalmente tienen los derechos involucrados en los procesos de ese linaje, dicha facultad sólo está otorgada al Juez de primera instancia, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, siendo claro que este argumento del recurso, constituye una objeción nueva, que no puede ser considerado por esta Corporación.*

Resueltos los puntos objeto de apelación, se continua con la revisión de la sentencia, así que establecida la viabilidad de la permanencia de la actora en el régimen de prima media, sin solución de continuidad a cargo de Colpensiones, analizaremos si la señora MARIA LIGIA tiene derecho a la pensión de vejez, debiéndose observar en primer lugar si es beneficiaria del régimen de transición, siendo esta una prerrogativa en favor de ciertas personas próximas a adquirir el derecho a pensionarse, teniendo una expectativa que en su momento se quiso proteger.

El artículo 36 de la ley 100 de 1993, determinó que las personas que a 1 de abril de 1994 tuvieran 40 años de edad si son hombres, o 35 si son mujeres, o 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, gozaban del régimen de transición pensional, respetándose las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen anterior al que se encontraran afiliados, en este caso, el artículo 12 de Decreto 758 de 1990, que exige en los mujeres 55 años y un mínimo de quinientas (500) semanas pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o un mil (1.000) semanas sufragadas en cualquier tiempo.

Del material aportado al proceso, tenemos que la señora MARIA LIGIA, nació el 10 de mayo de 1961, cumpliendo 55 años los mismos día y mes de 2016, lo cual indica que al momento de entraren vigencia la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994, contaba con 33 años. En cuanto a las semanas cotizadas para la citada data, conforme a la historia laboral de folios 20, tenía 523,14 que equivalen a 10 años, lo que nos lleva a concluir que no es beneficiaria del régimen de transición.

Así las cosas, la prestación de vejez debe estudiarse con los requisitos del sistema general de pensiones, artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la ley 797 de 2003, el cual exige como requisitos los siguientes:

**“Artículo 9º.** Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1º de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015...”

La accionante cumplió 57 años el 10 de mayo de 2016 y cuenta con más 1.640 semanas, como se desprende de la historia laboral más actualizada aportada por el fondo de pensiones privado PORVENIR al responder la demanda que data del mes de octubre de 2018 (fls. 209 a 222), cumpliendo con esta exigencia, asistiéndole derecho a la pensión. Se colige de la citada historia laboral que la accionante continua efectuando aportes, siendo clara la norma aplicable al caso, que tan solo con la novedad del retiro del último empleador y el cumplimiento de la edad y las semanas puede lograrse el disfrute de la prestación.

Al respecto, el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, en cuanto al régimen de prima media con prestación definida, dispone que:

*“Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del instituto de seguros sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley.”*

A su turno, el Acuerdo 049 de 1990 del ISS, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad dispone:

**“ARTÍCULO 13. CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN POR VEJEZ.** La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero

*será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.*

Así mismo preceptúa el inciso 2° del artículo 4° de la Ley 797 de 2003, lo siguiente:

*“La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.”*

De conformidad con las anteriores disposiciones, se reitera que el derecho a la pensión de vejez se causa con el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la ley y debe empezar a pagarse a partir de la fecha de la novedad de retiro, o en su defecto, a partir de la última cotización efectuada, por cuanto que por el hecho de que el afiliado deje de cotizar y solicite la prestación económica por vejez, se manifiesta de forma tácita su voluntad de retiro del sistema como afiliado para adquirir el estatus de pensionado.

Así que, se dejará en suspenso el disfrute de la prestación, hasta tanto acredite la novedad de retiro, prestación que se liquidará conforme a los parámetros del inciso 2° del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y para efectos de establecer el MONTO PENSIONAL se tendrá en cuenta el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 10 de la Ley 797 de 2003, con la fórmula allí establecida, como lo indicó la A Quo.

Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir S.A. Se fijan las agencias en derecho en \$908.526.

### **FALLO DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia apelada y revisada en el grado jurisdiccional de consulta. Se **ADICIONA** el numeral **TERCERO**, ordenando a Porvenir S.A. el traslado de los descuentos de la garantía de pensión mínima, sumas adicionales de la aseguradora.

*Radicado N° 05001 31 05 005 2018 00457 01*

Costas de segunda instancia a cargo de Protección S.A. Se fijan las agencias en derecho en \$908.526.

Lo decidido se notifica por ESTADOS.

Los Magistrados,



CARLOS JORGE RUIZ BOTERO



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 117 del 07  
de julio de 2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>